

Las farmacias estallan y piden auxilio a Rajoy para que intervenga la sanidad valenciana

Los farmacéuticos podrían decidir hoy un nuevo cierre de oficinas por los impagos

JOAQUÍN NÚÑEZ / Alicante

Durante las últimas semanas ha ido creciendo en el ámbito sanitario el ruido de fondo contra las propuestas de recorte de la Conselleria de Sanidad, pero ayer las protestas estallaron y adquirieron categoría de grito desesperado entre los farmacéuticos, a los que la Generalitat les adeuda 387 millones de euros por las recetas que han dispensado (y no cobrado) a sus pacientes. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime J. Carbonell, pidió al Gobierno central, a través de los medios de comunicación, que tome cartas en el asunto y que asuma las «competencias» de la sanidad pública valenciana, ante la manifiesta incompetencia del Consell.

Carbonell, muy molesto por el último incumplimiento de Sanidad, que debía de haber ingresado el pasado viernes 120 millones de euros a las farmacias, defendió que si el sistema no se sostiene «habrá que pedir socorro a Madrid». El presidente de los farmacéuticos se adhería así a las manifestaciones de la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, quien el martes difundió que el criterio mayoritario entre los doctores valencianos es que la Generalitat devuelva las competencias sanitarias al Estado. Carbonell insistió en la misma línea argumental, pero fue más allá y señaló que la sanidad pública corre un serio riesgo y que es urgente la ayuda del Gobierno de España.

La Conselleria de Sanidad adeuda a los farmacéuticos las recetas que suministraron en octubre, noviembre y diciembre. Los propietarios de las farmacias están asumiendo de forma individual el coste de los elevados prestamos que se han visto obligados a solicitar para adquirir los medicamentos. La deuda vencida asciende a 387 millones de euros, pero la soportada es de 240 millones más, por los fármacos que han suministrado en enero y febrero. El sector ya no se cree las promesas de Sanidad y hoy se celebrarán



El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime J. Carbonell, ayer en la sede colegial. / ROBERTO PÉREZ

Rosado 'recomienda' a los Colegios que se metan en sus propios asuntos

J. NÚÑEZ / E.A.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, contestó ayer a los colegios de médicos y enfermeros que los únicos interlocutores legales para negociar cuestiones laborales y plantear una huelga son los sindicatos y recalcó que «ninguno» de ellos ha convocado ningún paro en la Sanidad valenciana.

Rosado se refirió de este modo al comunicado del Colegio de Enfermeros, en el que advertía de que harán huelga de celo y convocarán un paro indefinido si el Consell no retira el decreto de recortes, y de la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, que además de solicitar una huelga reclamó la devolución de

las transferencias al Gobierno central por «la mala gestión».

Al respecto, Rosado mantuvo que en la Comunidad «hay muchísimos médicos y cada uno puede tener la opinión que buena mente quiera». Además, replicó a Fuster que cuando «la colegiación es obligatoria como lo es en la Comunidad habría que

reflexionar por lo menos si esta colegiación obligatoria significa tener la misma opinión que las personas que las expresan».

El conseller recordó que la misión que tiene el Colegio de Médicos es «velar por la deontología médica» porque las organizaciones sindicales son «las encargadas de encauzar las relaciones laborales de los profesionales» y de «negociar con la Administración medidas de carácter laboral».

asambleas en los tres colegios para decidir acciones de protesta. Hay pocas salidas: cerrar las oficinas, cobrar los medicamentos o dejar de dispensar fármacos. De las reunio-

nes puede salir cualquier cosa porque estos profesionales ya han cruzado el límite y apenas tienen ya recursos para mantener abiertas las farmacias y pagar a los empleados.

El desanimo (y la crispación) es de una notable envergadura en todo el sector sanitario. El lunes hay convocada una reunión conjunta en Alicante de todos los profesionales.

Las residencias se oponen a implantar el Abucasis

J.N.G.A. / Alicante

Los empresarios de residencias y centros de personas dependientes de la Comunidad Valenciana arremetieron ayer contra la Conselleria de Sanidad porque ha iniciado contactos directos con empresas del sector para «exigirles» la implantación del programa informático Abucasis para la dispensación de medicación y material fungible.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) calificó de «insólita» la actitud de la Dirección General de Farmacia que, sin comunicación oficial previa, está «obligando» a que los centros cambien sus programas informáticos. La iniciativa ha generado una «situación caótica» en las residencias, con «complicaciones administrativas y desinformación entre los operadores sociosanitarios», según explicó ayer a este periódico la gerente de Aerte, María José Mira.

Mira llamó la atención en el considerable gasto que deben asumir las residencias para incorporar a sus sistemas el programa Abucasis, que obliga también a renovar equipos informáticos y un periodo de adiestramiento del personal. Además, los centros que lo incorporen deben, en principio, mantener también la gestión con el sistema que emplean en la actualidad, según señaló la gerente de Aerte.

Este no es el único conflicto que mantiene la asociación con la Administración autonómica. A las empresas asociadas, 135 entidades que disponen de 190 centros, la Generalitat les adeuda 50 millones de euros. El compromiso inicial es pagar antes de abril el 50% de la deuda total y el resto se saldaría mediante un calendario de pagos, pero hasta el momento no hay nada claro, según explicó Mira.

Educación planea echar a tres de cada cuatro interinos de ESO en las Marinas

El sindicato UGT alerta del despido del 73% de profesores y del 40% de maestros

J. NÚÑEZ / Benidorm

La Conselleria de Educación podría prescindir del curso próximo de más de 400 profesores interinos que están destinados en la actualidad en centros educativos de las Marinas. Según una estimación realizada por UGT, las medidas de recorte de plantillas que va a poner en marcha la Generalitat provocarán el despido del 73% de los do-

centes interinos de ESO y Bachillerato, y del 40% de los maestros adscritos a colegios de Calp, Dénia, Benissa, Altea y otros municipios de las Marinas Alta y Baja.

La federación de trabajadores de Enseñanza de UGT considera que la ampliación del horario lectivo de los profesores de Secundaria y FP y el recorte de docentes en Infantil y Primaria va a generar un aluvión

de despidos el curso próximo. El sindicato advierte de que el programa de recortes de la Conselleria de Educación dejará en la calle, si se aplica finalmente, a 400 de los 660 profesores interinos que trabajan en municipios de las Marinas.

El sindicato, que ha elaborado el cálculo teniendo en cuenta la actual plantilla docente de estas comarcas, rechaza de plano las medidas de la conselleria, que califica como un «auténtico hachazo» a la calidad de la Educación Pública.

El secretario comarcal de Fete-UGT en las Marinas, Andreu Verdú, señaló ayer que con estas políticas de recorte y ajuste serán los

Las cifras del informe

> **73%**. La ampliación del horario lectivo generará despidos masivos en los IES de las Marinas, dice UGT.

> **40%**. El informe del sindicato también advierte de despidos de maestros en los colegios, el 40%.

> **600**. En la actualidad, según las estimaciones de UGT, hay 600 interinos en las Marinas Alta y Baja.

> **400**. Si se aplican las medidas de recorte, 400 se quedarán en paro.

profesores y escolares quienes paguen las políticas autonómicas de «despilfarro», «derroche», «sobrecostes» y «excesos» desarrolladas

en los últimos años.

De otro lado, el sindicato cree que la Conselleria de Educación intenta «desviar la atención, enfrentando a padres y profesores por las actividades extraescolares» y considera, además, que en un futuro próximo la Generalitat cubrirá su «deficiente y deficitaria» gestión económica con la refinanciación de la deuda que mantiene con proveedores a través de un crédito del ICO.

Por otra parte, los llamados inspectores accidentales de Educación dejarán de ser conocidos como los «nombrados a dedo». Y por primera vez en la Comunidad Valenciana, cualquier profesor podrá optar a formar parte de la bolsa de trabajo de este cuerpo que suele considerarse la culminación de la carrera profesional en la docencia, según publicó ayer el DOCV.